

## INTRODUCCIÓN\*

La revolución y la guerra de independencia configuraron un legado militar que modificó la dinámica de las relaciones de poder y el estilo de convivencia de la tradicional élite colonial rioplatense.<sup>1</sup> Este legado se materializó en el surgimiento de nuevos actores políticos que, procedentes de las fuerzas militares residuales del Ejército Revolucionario buscaron insertarse en el proceso de reconstrucción de las relaciones de poder derivado de la crisis de la independencia.<sup>2</sup> Tanto en el marco de los intentos centralistas de la primera década revolucionaria como en el posterior proceso de configuración de unidades políticas y soberanas más pequeñas, las provincias, comandantes y milicias utilizaron las nascentes instituciones y las armas para insertarse en las nuevas tramas de poder.<sup>3</sup> Las provincias constituyeron la nueva unidad política de referencia que canalizó la herencia militar revolucionaria a través de dos instituciones: el Poder Ejecutivo y el Ejército Provincial. A su vez, en

---

\* Este libro se inscribe en el Proyecto de Investigación I+D (HAR2010-17580) «Institucionalización del Estado: justicia y violencia política, América Latina, siglo XIX», en el Proyecto UBACYT «Estado, política y ciudadanía en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Prácticas y representaciones» (UBA) y en el Proyecto PIP/CONICET «La conflictiva construcción del consenso en el marco del orden conservador. Actores, espacios y formas de participación política, 1880-1898» (CONICET/Instituto Ravignani).

<sup>1</sup> HALPERIN DONGHI, 2002: 383-386.

<sup>2</sup> Se entienden por actores políticos «colectivos o sujetos que de forma conjunta o individual gestionan y transforman la política e inciden en la construcción de lo “público” y en la configuración de la ciudadanía». IRUROZQUI, 2000.

<sup>3</sup> Antes de 1831, existieron diversos gobiernos centrales, Primera Junta (mayo a diciembre de 1810); Junta Grande (enero a septiembre de 1811); Primer Triunvirato (septiembre de 1811 a octubre de 1812); Segundo Triunvirato (septiembre de 1812 a enero de 1814); Directorio (enero de 1814 a febrero de 1820). Todos tuvieron carácter provisional destinado a durar hasta que se reuniera la asamblea constituyente. En la década de 1820 solo cuajó un fugaz intento centralista basado en la Constitución de 1826: la Presidencia de Rivadavia (febrero de 1826 a agosto de 1827). CHIARAMONTE, 1993: 81-127.

calidad de Estados autónomos y soberanos se articularon mediante una laxa unidad confederal en el marco de la que ostentaron amplias facultades, entre ellas la capacidad de poseer y movilizar sus propias fuerzas así como declarar la guerra a sus pares.<sup>4</sup> Con la firma de la Constitución Nacional de 1853 el referido escenario cambió. La Carta Magna fijó la creación de un poder central con vocación nacional y con ello la modificación de las tradicionales atribuciones provinciales. Este pacto constitutivo fue firmado por trece de las catorce provincias ya que Buenos Aires lo rechazó uniéndose al proyecto nacional casi diez años después. Tanto en la etapa de la escisión como en la de la conformación de un Estado unificado la configuración del vínculo provincia-nación puso en juego el manejo de un instrumento que había sido fundamental en la definición provincial y ahora también lo era en la construcción del poder central: la violencia, es decir la fuerza y su legítima utilización para accionar en el terreno político. ¿En qué consistieron las polémicas y disputas por el uso de la violencia? ¿En qué escenarios se hicieron visibles? ¿Quiénes las protagonizaron?

Los conflictos por el control de la fuerza atravesaron todo el siglo XIX y se visibilizaron, en primer lugar, en la organización y el funcionamiento de los Ejércitos Provinciales, y luego del Ejército Nacional. Este último quedó conformado por las tradicionales milicias provinciales a las que se sumaron el Ejército de Línea y la Guardia Nacional. Se dispuso que las milicias de las provincias pasaran a la órbita del poder central aunque su destino real fue desaparecer en beneficio de una nueva milicia estatal, la Guardia Nacional. Esta institución se fundó sobre la base del principio de la ciudadanía en armas y de una noción descentralizada del poder militar que contemplaba algunas de las antiguas facultades de los gobernadores, pero ahora ejecutadas bajo la órbita del Estado. En contraste, el Ejército de Línea estaba organizado desde el poder central y albergaba una noción profesional y regular del servicio de armas. Ambas fuerzas convivieron en tensión y, además de remitir a diferentes concepciones de la defensa, albergaron en su interior nociones de Estado muy distintas.<sup>5</sup>

La impronta provincial de la Guardia Nacional así como su vinculación con la vida política local hicieron especialmente visibles las disputas por las armas y los actores que las protagonizaron. La misma se des-

---

<sup>4</sup> Luego del fracaso unitario, el escenario político rioplatense quedó limitado a la existencia de Estados Provinciales que, en 1831, lograron una débil formalización de sus relaciones, también «provisoria aunque permanente», la Confederación. La misma duró hasta la Batalla de Caseros y la posterior firma de la Constitución Nacional en 1853. CHIARAMONTE, 1993.

<sup>5</sup> SABATO, 2008.

empeñó como brazo armado del gobernador y actuó en enfrentamientos políticos provinciales y regionales. A su vez, su componente cívico la constituyó en un poderoso dispositivo electoral accionado por gobiernos y partidos para organizar comicios y movilizar votantes. Asimismo, los ciudadanos reivindicaron su deber-derecho de empuñar las armas mediante la Guardia Nacional frente a actores que pusieran en peligro «la república y sus leyes». Es decir que, por una parte, la Guardia incorporó a las disputas por el manejo de la fuerza a otro actor fundamental del sistema político: el ciudadano. Las formas de violencia no estatal —revoluciones y levantamiento armados— fueron reivindicadas por la ciudadanía como legítimos mecanismos de intervención en la vida pública y se articularon con frecuencia a los procesos electorales. Pero por otra, forjó un estrecho vínculo entre violencia y política que posicionó a las armas en el centro de la vida pública. Entonces, ¿qué papel correspondió a la fuerza en la construcción de un orden provincial y nacional?

Este libro propone una interpretación posible de los conflictos desarrollados en torno a las incumbencias militares y, en particular, respecto del papel de la violencia en la configuración de un orden político en la Argentina del siglo XIX. El estudio se concentra en una provincia de tradición militarizada, Tucumán, enmarcada en una región que también sentó las bases de sus relaciones a través de las armas, el Norte argentino. Las regiones constituyeron referentes geográfico-políticos consolidados en la primera mitad del siglo XIX. En su interior albergaron dispositivos que articularon a las provincias vecinas pero que también las enfrentaron. Esta mecánica, proyectada a la segunda mitad del siglo XIX, fue tolerada y muchas veces utilizada por los sucesivos gobiernos centrales para promover y garantizar la adhesión de las provincias. La óptica provincia/región se propone como mirador para evaluar la organización del Ejército Provincial y luego la tensión centralización/descentralización que encarnó la estructura del Ejército Nacional. Desde esa perspectiva, se examinan las fuerzas cívicas organizadas en las provincias —las milicias y la Guardia Nacional— y también se exploran aquellos cuerpos que, más allá de su servicio regular y aspiración profesional, fueron expresión —por varios años— de la descentralización del Ejército Nacional: los regimientos de línea. La dimensión militar de la vida pública provincial es particularmente estudiada en este trabajo para tratar de interpretar la relación entre violencia y política en la construcción de un orden. Se analiza la participación de las milicias, de la Guardia Nacional y de las fuerzas de línea asentadas en la provincia en las luchas políticas locales, en especial en los procesos electorales. También se evalúan los escenarios de visibilización del ciudadano en armas y, en particular, aquellos que expresaron su directa relación con

el votante. Asimismo, se estudia el correlato militar de los conflictos políticos provinciales y se pone atención en el papel de las milicias y de la Guardia Nacional en la construcción de las tramas del poder local antes y después de Caseros.

Desde hace algunas décadas, el interrogante por el rol de las provincias en la configuración de un orden político ha vuelto a posicionarse en el centro de la historiografía argentina, pero atravesado por hipótesis e inquietudes estimuladas por los actuales abordajes en torno al problema de la construcción estatal latinoamericana.<sup>6</sup> Estas nuevas perspectivas otorgan a las provincias un rol clave en la tarea de observación e interpretación de un complejo problema: la construcción de una comunidad política republicana vertebrada a partir del vínculo provincia-nación.<sup>7</sup> Las diferentes maneras de resolver ese vínculo a lo largo de la geografía continental latinoamericana redundaron en la emergencia de una variedad de repúblicas en las que la tensión centralismo/federalismo se resolvió de muy diferentes maneras.<sup>8</sup>

La historiografía argentina contemporánea adscribe a las tesis —ya clásicas— que demuestran que la organización del Estado-nación provino de un proceso constructivo lleno de marchas y contramarchas.<sup>9</sup> Recientes investigaciones coinciden en que el mencionado proceso no fue ni progresivo ni lineal ni implicó una gradual imposición del poder central sobre las provincias. Si bien las mismas readaptaron sus atribuciones

---

<sup>6</sup> Sobre la renovación de la historia política y su impacto en la historia política de América Latina del siglo XIX, véase REMOND, 1981; QUIJADA, 1994; ANNINO, CASTRO LEIVA y GUERRA, 1994; SABATO, 1999, 2006; MALAMUD, 2000a; IRUROZQUI, 2005a; CHARTIER, FEROZ, 2006; PALTÍ, 2007, entre otros.

<sup>7</sup> Véanse los trabajos incluidos en SABATO y LETTIERI, 2003; BRAGONI y MÍGUEZ, 2010 y también el balance de Eduardo Míguez en MÍGUEZ, 2012.

<sup>8</sup> CARMAGNANI, 1993; CHIARAMONTE, 1993, 81-127; BOTANA, 1993, 224-255; CARVALHO, 1987 y 2011, 141-157; HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 1994; MC EVOY, 1997; IRUROZQUI, 2000; AGUILAR y ROJAS, 2002; MÉNDEZ, 2005; PERALTA RUIZ e IRUROZQUI, 2005; SABATO, 2006, 2008 y 2013; GALLO, 2013 (reed.).

<sup>9</sup> Las obras de Tulio Halperin Donghi, José Carlos Chiaramonte, Natalio Botana y Oscar Oszlak constituyen un punto de partida primordial para analizar este proceso. Allí se explica que el Estado-nación no provino de una identidad nacional preexistente, sino que fue producto de una construcción —nada carente de conflictos— marcada por tres problemas centrales: la integridad territorial, la formación de una identidad nacional y la organización de un régimen político (BOTANA, 1993: 224-255). El Estado se entiende, entonces, como un aspecto constitutivo de un proceso de construcción social. El mismo implica la conformación de la instancia política que articula la dominación de la sociedad y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de instituciones que hacen posible su ejercicio. Se enlazan así la organización del poder y el ejercicio de la dominación política. Un Estado de estas características posee propiedades que lo definen como tal: la capacidad de externalizar su poder; de institucionalizar su autoridad; de diferenciar su control; y de internalizar una identidad colectiva. OSZLAK, 1997: 15-17.

e instituciones a los preceptos impartidos por la Constitución de 1853, esto no implicó una subordinación directa o paulatina al poder central. La nueva fórmula constitutiva permitió la emergencia de maneras diferentes e igualmente legítimas de pensar el Estado, las relaciones de poder y el vínculo provincia-nación. Algunas de estas alternativas fracasaron, como la experiencia confederacional urquicista marcada por la conflictiva coexistencia de «dos repúblicas»: la Confederación Argentina, con centro en la ciudad de Paraná —provincia de Entre Ríos— y adscripta a la Constitución de 1853; y Buenos Aires, constituida en Estado independiente regido por su propia Constitución.<sup>10</sup> Otras convivieron en tensión al interior del Estado unificado a partir de 1862. En ese marco, y hasta avanzada la década de 1870, el poder central estuvo mucho menos definido y gozaba de mucha menos fortaleza de lo que la historiografía más tradicional ha relatado.<sup>11</sup> Justamente, los estudios contemporáneos que desde la óptica provincial han abordado el conflicto Buenos Aires-Confederación, la reformulación del papel del gobernador, de la Legislatura y de las elecciones, el funcionamiento de los partidos y el papel de la violencia —estatal y no estatal— en la construcción del orden político demuestran el complicado juego al que se sometieron las provincias y el naciente poder central, luego de 1853. A su vez, indican la centralidad de la variable regional en el funcionamiento político provincial previo a 1853 y en la posterior construcción del vínculo provincia-nación.<sup>12</sup>

## MILICIAS, CIUDADANÍA EN ARMAS Y VIOLENCIA

Indudablemente, los cambios experimentados en los estudios sobre las milicias entendidas ya no como fuerzas informales y laxas, sino como formas de organización militar alternativas en el marco del siste-

---

<sup>10</sup> La hipótesis de las «dos repúblicas» es de Hilda Sabato. Véase SABATO, 2012, caps. 1, 2 y 3, 17-95. La llamada Confederación Argentina liderada por Urquiza adscribía a los preceptos de un Estado federal plasmados en la Constitución de 1853. Las provincias debían modificar sus instituciones y prerrogativas a instancias del nuevo Gobierno federal que también debía crearse, institucionalizarse y definirse.

<sup>11</sup> Academia Nacional de la Historia. *Historia argentina contemporánea*, 1963, 1966; *Nueva historia de la nación argentina*, ts. 4, 5 y 6.

<sup>12</sup> El análisis de la política provincial a través de su correlato regional constituye una óptica de análisis particularmente desarrollada por los estudios políticos de la segunda mitad del siglo XIX concentrados en la región del Norte y Cuyo. Muchas de las explicaciones respecto de los enfrentamientos provinciales y de las luchas políticas internas de las provincias se esgrimen apelando a la variable regional. Véase BRAVO, 2003: 243-258; BRAGONI, 2003: 205-222 y 2010: 29-61; BUCHBINDER, 2004; MACÍAS, 2011a: 31-50; NAVAJAS, 2012: 41-74; QUINTIÁN, 2012.

ma político, han contribuido con nuevas miradas sobre la dimensión militar de la vida pública y de la ciudadanía en América Latina decimonónica.<sup>13</sup> En general, la historiografía ha subestimado su rol político en los procesos de construcción estatal considerándolas cuerpos meramente residuales subordinados a las fuerzas regulares. Tradicionales investigaciones para el caso argentino han privilegiado el estudio morfológico e institucional del ejército regular al que consideraban asociado a un proceso fundamental en la marco de la configuración estatal: la monopolización de la fuerza por parte del poder central.<sup>14</sup> En el marco de ese proceso entendido como unidireccional, las milicias llegaron a ser confundidas con fuerzas de línea o con organizaciones informales como las *montoneras*, restándoles importancia o bien atribuyéndoseles el papel de obstáculos en la configuración y el éxito de un orden político.<sup>15</sup> El estudio de la morfología y funcionamiento de estas fuerzas desde una óptica política está proveyendo a la historiografía de nuevas conclusiones, por un lado, sobre su conflictiva convivencia con los cuerpos regulares y las diferentes concepciones de defensa a las que estas fuerzas remitían; por otro, sobre el rol del ciudadano en armas en la construcción republicana y el papel de la guerra y de las revoluciones en la configuración de un orden político.<sup>16</sup>

Las milicias eran fuerzas auxiliares del ejército, convocadas y movilizadas de manera eventual. Estaban integradas exclusivamente por ciudadanos que mediante su enrolamiento en las mismas se comprometían con la defensa de su patria. Por su estructura y funcionamiento, se diferenciaban del servicio regular-profesional y del posterior sistema de conscripción obligatoria implementado en el siglo xx. Su organización se remonta a los años de la colonia. Algunos estudios para el antiguo

---

<sup>13</sup> Los nuevos estudios sobre la construcción ciudadana latinoamericana del siglo XIX confieren a la misma tres dimensiones constitutivas: la dimensión electoral, la de la opinión y la de la armas. Véase CARVALHO, 1995 y 1999: 321-371; SABATO, 2001: 1229-1314 y 2005; IRUZOQUI, 2005a; MACÍAS, 2013a.

<sup>14</sup> Véase, por ejemplo, Academia Nacional de la Historia. *Historia argentina contemporánea*, 1963, 1966; SCENA, 1980.

<sup>15</sup> Las *montoneras* eran organizaciones militares no oficiales y disidentes de la Guardia Nacional en tiempos de la Guerra del Paraguay (1864-1870). Justamente, fue por su escisión por lo que se les atribuyó despectivamente ese nombre. Los estudios sobre estas fuerzas también han demostrado una importante renovación. Investigaciones de la última década demuestran que poseían una lógica de funcionamiento y una estructura vincular interna que remitían a la organización y las jerarquías de la Guardia Nacional y que encarnaban una noción propia de las relaciones sociales y políticas. Para un estudio de las *montoneras* en el Norte, su estructura interna y su accionar político remitimos a los trabajos de FUENTE, 1998: 267-291, y 2000.

<sup>16</sup> Véanse las síntesis incluidas en CANSANELLO, 2003; MACÍAS y SABATO, 2013.

virreinato del Río de la Plata y la primera mitad del siglo XIX clarifican sus características, organización y funciones. En tiempos de la revolución de independencia funcionaron como cuerpos cívicos-urbanos auxiliares de los ejércitos revolucionarios. La proyección de su organización local colonial permitió a las autoridades de esa índole mantener su control en el enrolamiento y movilización. Sin embargo, su composición social se amplió e incluyó a gran cantidad de habitantes de las ciudades, muchos de ellos no portadores de las calidades vecinales exigidas en tiempos coloniales. Justamente, las variadas características de sus integrantes, el alto número de enrolados, sus funciones vinculadas con la defensa de la ciudad y sus instituciones, todo esto en combinación con el fraccionamiento interno de los ejércitos revolucionarios, se constituyeron en razones que explican la íntima relación entre las milicias y la vida política revolucionaria. La Guardia Nacional, organizada en las naciones latinoamericanas del siglo XIX, retomó, afianzó y nacionalizó la tradición miliciania iniciada en las décadas de la guerra revolucionaria. En la Guardia Nacional debían enrolarse «todos los ciudadanos de la nación» ya que, en tanto tales, estaban comprometidos con la defensa de la Constitución y de las instituciones públicas. Su composición contrastaba con la de los ejércitos regulares, integrados por soldados que muchas veces eran reclutados mediante el sistema de enganche o se encontraban allí cumpliendo una pena o castigo. De esta manera, a diferencia de la Guardia Nacional, no todos los enrolados en el ejército lo hacían en pleno goce de sus derechos civiles.<sup>17</sup>

Inicialmente, los estudios latinoamericanos se interesaron por esta institución militar y abordaron su estudio en relación con la construcción de una identidad nacional asociada a la configuración del Estado-nación. A la luz de las perspectivas utilizadas para el estudio de la Guardia Nacional francesa, expresión de la «nación en armas una e indivisible», estos estudios analizaron los rituales cívico militares, actos y discursos emanados desde el poder central y su impacto en la construcción de una identidad nacional y en el aprendizaje de los comportamientos ciudadanos.<sup>18</sup> A partir de los resultados obtenidos se formula-

---

<sup>17</sup> Véanse los trabajos incluidos en CHUST y MARCHENA, 2007. En Brasil, la Guardia Nacional heredó la tradición cívica anclada en las milicias imperiales sin que estas pasaran por la experiencia bélica y revolucionaria que caracterizó al resto de Hispanoamérica. Esa tradición fue absorbida por la Guardia Nacional organizada en Brasil en la primera mitad del siglo XIX y, como en el resto de Latinoamérica, constituyó allí una alternativa a la fuerza regular materializada en el Ejército de Línea. Sobre la organización y los fundamentos de la Guardia Nacional en Brasil, véase CASTRO, 1979.

<sup>18</sup> Véanse CARVALHO y PERALTA RUIZ, incluidos en SABATO, 1999 y, en especial, CARVALHO, 1995.



ron hipótesis que sostienen que la Guardia Nacional fracasó en ambos terrenos como consecuencia de su organización provincial-municipal y su politización a nivel local. Nuevos avances desarrollados desde la óptica provincial e interesados en desentrañar los sentidos atribuidos a la violencia en la construcción de un orden político en el siglo XIX proponen un examen diferente.<sup>19</sup>

En primer lugar, la Guardia Nacional constituye un excelente mirador para abordar la conflictiva construcción del vínculo provincia-nación, en especial las tensiones en torno al problema de las incumbencias militares y el control de la violencia. La Guardia era una fuerza nacional, pero su organización se atribuyó a los gobernantes locales y esto, indefectiblemente, los vinculó también con su movilización. La Guardia cumplía también tareas de policía movilizadas por las autoridades provinciales para «custodiar el orden interno». En segundo lugar, el enrolamiento en la Guardia Nacional acercó a los ciudadanos a sus compromisos cívicos y republicanos y a los atributos del ciudadano en armas. Los rituales, prácticas y discursos identificaban a la nación con la república y con la Constitución. De esta manera, el acto de enrolarse en la Guardia era ya de por sí una forma de identificación del ciudadano con la república y por lo tanto con la nación. El enrolamiento implicó el cumplimiento de un deber pero también la posibilidad de ejercer derechos, entre ellos, votar y empuñar las armas «en defensa de las instituciones republicanas y sus leyes». El derecho a revolución ha sido particularmente estudiado por Hilda Sabato, quien ha demostrado que esta práctica, cuya justificación apeló a viejas tradiciones coloniales reformuladas a la luz de las experiencias francesa y norteamericana, no estuvo reñida de la civilidad y se constituyó en parte indisociable de la experiencia republicana decimonónica.<sup>20</sup> El acto de empuñar las armas se reivindicó como un deber, pero también como un derecho de la ciudadanía frente a agentes internos o externos que pusiesen en peligro, justamente, a la república. Las revoluciones o levantamientos armados no tenían el propósito de imponer cambios estructurales en el sistema político, sino de reivindicar la Constitución «frente a gobiernos despóticos». Estudios que

---

<sup>19</sup> THOMSON, 1990; HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 2007: 223-247; SOBREVILLA, 2007: 159-185; GALLO, 2007; SABATO, 2008; IRUZOQUI, 2011; FERTIG, 2010; GOLDONI, 2010; SILVA, 2010; MACÍAS, 2011b. El trabajo ya clásico de Jeanne Berrance de Castro asegura que fue la organización municipal y provincial de la Guardia Nacional en Brasil la que promovió la conservación de las nociones ligadas a una milicia ciudadana luego de su desaparición. Véase CASTRO, 1979.

<sup>20</sup> SABATO, 2003. Para Estados Unidos y Francia, véanse entre otros DELBERT CRESS, 1984: 22-42; WHISKER, 1992; DEUDNEY, 1995; COOPER, 1997; GILPIN FAUST, 2001: 3-38; CORNELL, 2006; AGULHON, 1979; IHL, 1996; ROSANVALLON, 1992 y 1998.



abordan la institucionalización de los pronunciamientos militares tanto en México como Centroamérica sostienen que estos levantamientos constituían formas de participación directa amparadas en el «sagrado derecho de insurrección» o de «resistencia» a partir de los cuales los ciudadanos recuperaban su soberanía y, mediante las armas, podían deponeer legítimamente a un Gobierno que había ultrajado el pacto de origen.<sup>21</sup> Las movilizaciones armadas también se han examinado como ámbitos de participación y de negociación popular utilizados en muchos casos por aquellos excluidos de la ciudadanía para manifestar demandas y negociar respuestas.<sup>22</sup> Tal como plantea Maurice Agulhon, la violencia se asoció con instituciones y prácticas que se constituyeron en instancias de transmisión de ideas y principios republicanos en los que los individuos y las armas adquirieron un vínculo esencial.<sup>23</sup>

Otra cuestión de importancia central: a través de la Guardia se estableció una directa relación entre el ciudadano en armas y el votante. En Argentina, por ejemplo, se planteó como requisito la acreditación del enrolamiento en la misma para poder votar. Este precepto la vinculó de manera directa con la vida electoral, constituyéndose en espacio de politización social y de movilización de electores.<sup>24</sup> Allí se formaron clientelas y partidos cuyos líderes intentaron controlar a los votantes mediante la monopolización de sus boletas de enrolamiento.<sup>25</sup> De aquí la importancia de los actores intermedios, los comandantes de la Guardia Nacional, en la construcción del poder político.<sup>26</sup>

La guerra, como forma de violencia colectiva pero también como instrumento político, ha merecido nuevamente la atención de los historiadores por el protagonismo adquirido allí por las fuerzas de línea y la Guardia Nacional.<sup>27</sup> En algunos casos la guerra se analiza como instan-

---

<sup>21</sup> HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 2005; MEJÍAS, 2004.

<sup>22</sup> MÉNDEZ, 1995; IRUROZQUI, 2011.

<sup>23</sup> GONZÁLEZ BERNALDO, 2000: 142.

<sup>24</sup> En general, la amplitud del enrolamiento en la Guardia se correspondió con la amplitud del electorado.

<sup>25</sup> GRAHAM, 1995; SABATO, 1998; GUARDINO, 2005; IRUROZQUI, 2005a; SABATO y LETTIERI, 2003; GELER, 2007; BRAGONI y MÍGUEZ, 2010; MACÍAS, 2003 y 2011a.

<sup>26</sup> Los comandantes de milicia y de la Guardia Nacional han despertado particular interés en la historiografía argentina. Si bien sobre este tema volveremos a lo largo del libro, un importante número de trabajos sirven de punto partida, entre ellos, FRADKIN, 2010: 293-306; BRAGONI, 2010: 29-60; PAROLO, 2008b: 175-198; BUCHBINDER, 2010: 99-120; SCHMIT, 2010: 199-223; LANTERI, M.<sup>a</sup> S., 2011; MACÍAS y NAVAJAS, 2012 y 2014. El papel de los comandantes de la Guardia Nacional en el escenario de la frontera sur se analiza en YAN-GILEVICH, 2006; RATTO, 2011; BARBUTO y DE JONG, 2011; QUIJADA, 2012; CANCIANI, 2012b.

<sup>27</sup> La obra pionera de HALPERIN DONGHI, 1972 ha estimulado gran cantidad de estudios sobre la relación entre la guerra, la desarticulación del espacio colonial y la formación de nuevos sistemas políticos.

cia fundacional de la república y de nuevos sistemas identitarios.<sup>28</sup> La guerra también se conceptualizó como «sujeto rector de la práctica política» que, además, albergó e hizo visible la tensión en torno a las incumbencias militares. En la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX estas incumbencias estaban ambiguamente definidas. Los intersticios dejados por la normativa permitieron a los gobernadores actuar con bastante soltura en relación con la organización y movilización de la Guardia Nacional en el marco de un esquema político distinto al de la primera mitad del siglo XIX.<sup>29</sup>

### PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

El problema de las incumbencias militares y el papel de la violencia y de las fuerzas armadas en la configuración de un orden político republicano se analizan desde la perspectiva provincial y regional. El estudio se concentra en la provincia de Tucumán, enmarcada en la conflictiva región del Norte argentino. El propósito general es desentrañar el tránsito del Ejército Provincial al Ejército Nacional, así como las múltiples posibilidades que se abrieron en torno a la construcción de un nuevo orden político luego de la firma de la Constitución Nacional. El análisis arranca en el capítulo 1 con un estudio del Ejército Provincial y su papel en la construcción político-administrativa de la provincia en los años de la organización y consolidación de los Estados Provinciales (1832-1852). Se analiza, en particular, la configuración del Poder Ejecutivo desde la óptica militar y el vínculo generado entre milicias y gobernador en la construcción del poder local. Este esquema, desarrollado en un marco confederacional bastante laxo y liderado por Buenos Aires, concluyó en 1852 con la Batalla de Caseros y la posterior sanción de la Carta Magna. El primer tramo de la organización nacional se circunscribe a la década de 1850. En el marco de la llamada Confederación Argentina convivieron trece de las catorce provincias ya que Buenos Aires, en desacuerdo con algunas cláusulas de la Carta, no la firmó y posteriormente se constituyó en Estado independiente. En ese marco de escisión se estudia el conflicto Buenos Aires-Confederación, pero a partir del impacto que este provocó en las relaciones interprovinciales y, en particular, se analiza la proyección de la violencia como mecanismo de acción política. Por último, se presta atención a la reforma militar desa-

---

<sup>28</sup> ADELMAN, 2011; THIBAUD, 2011; HÉBRARD, 2002.

<sup>29</sup> BRAVO, 2003: 243-258; BUCHBINDER, 2004; MACÍAS, 2011a; GARAVAGLIA *et al.*, 2012.

rrollada en la provincia y su vínculo con la reconstrucción de la dirigencia local. Se analiza la organización de la Guardia Nacional, su impronta provincial y su conexión con las instituciones y la vida pública local. Luego de 1862, la relación provincia-nación se replanteó sobre la base del liderazgo bonaerense y mitrista que encabezó la unificación del Estado. En ese nuevo marco se desarrolla el capítulo 3 y se retoma la dimensión militar de la política provincial. Se presta especial atención al correlato regional de la política tucumana, modalidad que, heredada de la primera mitad del siglo XIX, perduró hasta fines de la década de 1860. La relación Guardia Nacional-revoluciones y elecciones ocupa en este capítulo un lugar central, así como el impacto de los principios de la ciudadanía en armas en la construcción cívica y en los levantamientos armados. La nueva etapa abierta por la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento modificó la política tucumana alineada aún en la órbita mitrista. En el capítulo 4 se analiza, por un lado, el proyecto centralizador de Sarmiento y su impacto en la configuración de Ejército Nacional. En particular, se presta atención a los debates y polémicas que este proyecto suscitó, cuyos alcances se prolongaron hasta fines del siglo XIX. Por otro, se examina la respuesta tucumana a la empresa sarmientina a través del estudio de las mutaciones en la organización militar provincial. Puntualmente, se evalúa la reorganización de la Guardia Nacional, el ocaso del sistema miliciano residual y la burocratización del Departamento de Policía y sus proyecciones a toda la década de 1870.

A lo largo del trabajo se intenta mostrar que las provincias fueron unidades políticas dinámicas insertas en entramados vinculares complejos y cambiantes —la confederación, la región, la nación— que les plantearon un gran desafío: la participación permanente e interactiva en procesos de institucionalización y de construcción política que tuvieron como eje el paradigma republicano. La violencia constituyó un instrumento que canalizó esa interacción y que dio visibilidad a los conflictos, pero también a las múltiples opciones políticas que se abrieron en la Argentina antes y después de Caseros.